



A poco de que concluyan los trabajos de la peor Legislatura que haya visto el país, se discute la posibilidad de que ministros, magistrados, y hasta jueces sean electos popularmente, replicando el fallido modelo boliviano, el cual ha demostrado que el esquema no sólo genera confusión, sino también un creciente voto en blanco o nulo, dado que la población no conoce ni está en condición de conocer los méritos o deméritos de quienes aspiran a ocupar una posición en el Poder Judicial.

La idea es descabellada, a menos de que se trate de cooptar y hacer nugatorios tres principios básicos y elementales en la administración de justicia. Ellos son: la independencia, la neutralidad y la imparcialidad que, si bien parecen lo mismo, no lo son, aunque todos esos atributos confluyen a un mismo fin, el mantener a quien decide ajeno a los intereses de los que litigan. En cuanto surge un móvil o interés que haga que quien imparte justicia se identifique por gratitud, afinidad o descarada complicidad con uno de los justiciables, la función se anula y torna ineficaz.

La división de Poderes no es una ocurrencia ni mucho menos una idea novedosa, se trata de un logro de la humanidad que ha demostrado proveer de condiciones elementales y básicas, mismas que las sociedades avanzadas proveen a quien las integra, poniendo a su alcance no sólo la posibilidad de dirimir controversias, sino además de lograr metas personales, armonizándolas con el bien común, también conocido como interés general.

La ingenua idea de que el pueblo bueno se ha volcado a las urnas a premiar los logros y resultados de la gestión saliente, ha hecho pensar a quienes detentan el poder que lo han hecho bien, cuando, en realidad, una turba de necesitados los mantiene al frente, para que no dejen de llegar las dádivas. Mal por los primeros, que cierran los ojos ante una lastimosa realidad, se salieron con la suya comprando voluntades, y lo saben, claro, de dientes para fuera prefieren asumir que el embute dinerario nada tuvo que ver en el resultado. Peor están por los segundos, que han entregado un cheque en blanco a quien hace

rato está pidiendo prestado para sufragar los conocidos como programas sociales. Miseria, ignorancia, complicidad y dádivas, mala combinación para conformar un gobierno.

Ya empezaron a refinanciar la deuda pública para que el profundo hoyo negro no se note en las finanzas públicas el año entrante. Han hecho la alquimia financiera necesaria para que lo que se iba a usar el año entrante para pagar deuda pública, sea empleado para que sigan llegando los esperados pagos asistenciales. La deuda no bajó, sólo se peloteó para más adelante, pero pactando tasas desproporcionadas. El mercado lo sabe, y ya sólo tiene bajo observación el fondeo de los inefables programas que, tarde o temprano, empezarán a llegar incompletos, para después tener que ser suspendidos o reducidos.

El problema, es bien sabido, no encuentra solución en el presupuesto federal, ya se agotaron los guardaditos y todo vehículo oficial del que pudieron echar mano, por lo que, sí, usted lo ha adivinado, se tendrá que hacer la más drástica y draconiana reforma fiscal, en la que, como en tiempos del otro **López**, se tendrán que gravar ventanas u otros objetos fiscales igualmente ridículos. Por eso, necesitan volver a los esquemas medievales, en los que el omnipotente señor de vidas y haciendas impone los tributos que necesita, sin que existan jueces que suspendan el arbitrario proceder del autócrata. Retrocederemos cientos de años el avance en el derecho público.

No sólo han perdido de vista que los recursos no llegarán a la velocidad necesaria para seguir comprando la conformidad del pueblo, sino que, de manera ineludible, provocarán que se comprima el aparato productivo. Verán simultáneamente desinversión y salida de capitales. Vendrá un trienio de macanazos, seguidos de la contricción y el arrepentimiento. En unos años, sufrirán la apremiante necesidad de volver a pactar con quienes producen la riqueza nacional. En tanto ello sucede, entremos al túnel, pronto se verá que la salida es la de siempre, volver a los equilibrios institucionales. A sufrir todos, los efectos de la borrachera electoral.

